



VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número **694/2024**, promovido por **************, contra actos del **Jefe de Gobierno de la Ciudad de México** y otra autoridad; y,

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado por *****
 ***** ***** , por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la
 justicia federal contra las autoridades responsables y actos reclamados que a
 continuación, se precisan:

III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen el carácter, las siguientes:

- a) El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
b) Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
c) Cabe aclarar que no existe autoridad alguna a la cual se impute el primer acto de aplicación de los actos reclamados, pues los pagos que constituyen el primer acto de aplicación y que más adelante se detallan, se realizaron en cumplimiento a un imperativo legal a cargo del quejoso.

IV. LA NORMA GENERAL, ACTO Y OMISION QUE DE CADA AUTORIDA SE RECLAME.

- a) Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se reclama:
I. La promulgación y/o expedición del 'Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial', publicado en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de enero de 2024, en específico, el beneficio fiscal contenido en los artículos PRIMERO, incisos a) y b) y SEGUNDO, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, cuyo texto es del tenor siguiente:

(Se transcribe)

- II. La expedición del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de diciembre de 2023, específicamente por lo que hace a la reforma del artículo 130, fracción I, del mencionado ordenamiento legal.*

- b) De la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se reclama la aprobación y expedición del 'Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México', publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de diciembre de 2023, específicamente por lo que

*hace a la reforma del artículo 130, fracción I, del mencionado ordenamiento legal.
(...).*”

SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 4, séptimo párrafo, 14, 16 y 31, fracción IV, de la **Constitución Federal**.

TERCERO. Turno de la demanda. La demanda fue turnada al **Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**, donde fue radicada con el número de expediente que le correspondió; por auto de **diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro**, admitió la demanda, pidió informes justificados a las autoridades responsables, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación (hoy Fiscal Ejecutivo Asistente).

CUARTO. Seguida la secuela procesal, en auto de *doce de abril de dos mil veinticuatro*, el juzgado de origen declaró carecer de competencia y ordenó la remisión del asunto al Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.

QUINTO. El asunto fue turnado a este **Juzgado Federal**, donde por auto de **treinta de abril de dos mil veinticuatro**, fue radicado con el número de expediente **694/2024**, se avocó al conocimiento, se convalidó todo lo actuado, y se señaló fecha de audiencia constitucional; y se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción;

La audiencia constitucional, se verificó al tenor del acta que antecede; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del **Acuerdo General 2/2024** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,¹ que establece que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen disposiciones relativas al pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2024 en la Ciudad de México, o cualquier norma general relacionada con el pago del impuesto mencionado.

¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de abril de dos mil veinticuatro.



SEGUNDO. Oportunidad. En el caso concreto la parte quejosa reclama la norma impugnada con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo mediante el entero del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticuatro lo cual tuvo lugar el **veintiséis de enero de dos mil veinticuatro**.

El plazo de quince días a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo transcurrió del veintinueve de enero al diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, previo descuento de los días veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero del año referido, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el *dos de febrero de dos mil veinticuatro*, debe tenerse como oportuna.

TERCERO. Precisión de actos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo **debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente** y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.²

Asimismo, ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudir a la lectura íntegra de la demanda **sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan** sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad³ y que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión.

Así, al fijar los actos reclamados, el Juez deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solamente de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.⁴

² Véase la jurisprudencia P./J. 40/2000, que lleva por rubro: **“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD”**. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, página 32. Registro: 192097.

³ Véase la jurisprudencia de la Séptima Época, Registro: 239099, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 18, Tercera Parte, Materia Común, Página 159 de rubro: **ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.**

⁴ Así lo estableció en la tesis P. VI/2004 que lleva por rubro: **“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”**. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, página 255. Registro 181810.



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 694/2024.

General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el **diecinueve de enero de dos mil veinticuatro**, en específico, los numerales PRIMERO, incisos a) y b), así como el diverso SEGUNDO, incisos a) y b).

Lo anterior, pues así lo reconocieron al rendir informe justificado. Además, su existencia se acredita con su propia publicación en el medio de difusión oficial correspondiente; además debe decirse que esa certeza es implícita al tipo de actos que se reclaman, en atención al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 a 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 191452 del rubro siguiente: ***“PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.”***

QUINTO. Causas de improcedencia esgrimidas por la autoridad responsable (infundadas). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio constitucional es un aspecto de orden público, por lo que su examen debe ser efectuado de forma oficiosa, con independencia de que las partes lo aleguen o no.

Al respecto, el Jefe de Gobierno invocó las causas de improcedencia siguientes:

a) Actos consentidos; artículo 61, fracción XIV, en relación al artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México.

b) Falta de interés jurídico; numeral 61, fracción XII, bajo tres vertientes:

- La primera, la parte quejosa impugna todos los rangos de las tarifas previstas en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, sin demostrar en que rango se encuentra y si este es desproporcional;

- La tercera, la parte quejosa no acredita ser propietario o poseedor del inmueble.

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

Para una mejor comprensión del contenido de la fracción XII del artículo 61, antes transcrito, es importante identificar en qué consiste el interés jurídico, institución que se encuentra prevista en rango constitucional en el artículo 107, fracción I, y que se traslada en idénticas condiciones al diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este último que prevé:

Del contenido de la porción normativa antes transcrita se aprecia que el interés jurídico se entiende como aquella vulneración, proveniente de una autoridad, a un derecho subjetivo del cual el quejoso se ostenta como titular; de esta forma, es meridianamente fácil advertir que el interés jurídico hace referencia a uno de los principios torales del juicio de amparo, al caso, el de agravio personal y directo.

- Ven afectados sus derechos por parte de las autoridades (agravio).
- Que dicha afectación sea respecto de aquellos derechos sobre los cuales el quejoso sea titular (personal).



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 694/2024.

- En tanto que el agravio sobre sus derechos debe ser pasado, presente o de un futuro en el cual no exista lugar a duda de la proximidad del nacimiento del acto de autoridad violatorio de algún derecho fundamental (directo).

De lo anterior, se observa la obligación de la parte quejosa de no solo exponer que el acto reclamado afecta alguno de los derechos subjetivos cuya titularidad sostiene, pues, además, debe cumplir con la carga de la prueba de acreditar en la instancia constitucional que ella, efectivamente, es quien ostenta el dominio sobre el derecho cuya protección solicita, habida cuenta que en el juicio de amparo sólo se protegen aquellos derechos cuya titularidad fue adquirida lícitamente a través de cualquiera de los actos jurídicos que se encuentran previstos en el sistema jurídico, lo anterior partiendo del mandato establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el artículo 2 de este último ordenamiento.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI. 3o. J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el tomo VIII, diciembre de 1991, Octava Época, página 117, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:

“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías”.

De conformidad con lo antes expuesto, la causa de improcedencia planteada **no se actualiza** en ninguna de sus variantes precisadas por la autoridad responsable, porque la quejosa reclamó el Decreto por el que se reforma y adicionan el Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la misma ciudad el **veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés**, en específico, el **artículo 130, fracción I**, con motivo de su primer acto de aplicación.

Así, en el primer caso, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió como pruebas de su parte, las documentales siguientes:

1. La propuesta de declaración de valor catastral y pago del Impuesto Predial respecto del inmueble ubicado en ***** ***** ***** *****

***** ** ***** ***** * **** ***** ***** ** *****

***** ** ***** *****

***** ***** *****

***** ***** ** ***** en la Ciudad de México, que tributa bajo la

cuenta predial *****.

2. Formato Múltiple de Pago a la Tesorería, en relación con el impuesto predial vigente para el año **dos mil veinticuatro**, por la suma de \$*****

(***** * **** * ***** ***** * **** ***** ***** *****

*****), en relación con la cuenta *****.

3. Recibo de pago a la Tesorería, de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, por la suma de \$***** (***** * **** * ***** *****

***** * **** * ***** ***** ***** *****),.

4. Asimismo, la escritura pública *****, de veinticinco de junio de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Número ** de la Ciudad de México,

***** ***** ***** ***** ****, relativa a:

A. Transmisión de Propiedad en Ejecución de Fideicomiso y Ejecución del mismo. El Fiduciario **** ***** *****

** ****

***** (como causahabiente de **** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** , antes ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** *****

***** ***** ***** *

***** ***** , por instrucciones de

los “***** EN PRIMER LUGAR” y del Comité Técnico de

Fideicomiso, TRANSMITE la plena propiedad y dominio del INMUEBLE a favor

de *** ***** ***** , quien adquiere para sí el *****

***** ** * ***** ***** ***** *

***** ***** *

***** ** ***** ***** ***** ***** y sus anexos consistentes en ****

cajones de estacionamiento y una bodega marcados con el mismo número del departamento, y que forman una unidad, del conjunto condominal, ubicado en la

***** ** actualmente marcada con el número ***** ** ***** *

**** ** * ***** ***** ***** ***** *****

México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México.



** *****
*****en la Ciudad de México; y que, respecto del inmueble referido se

efectuó el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal para **dos mil veinticuatro**; además de que no fueron objetados por las partes.

Así, con las pruebas antes relacionadas, se desvirtúa la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable; pues en el apartado en que ésta alegó que la parte quejosa no acreditó ser propietaria o poseedora del inmueble que tributa bajo la cuenta predial ***** , queda evidenciado lo contrario, por lo que se desestima la causa de improcedencia invocada por la responsable.

Tampoco se actualiza la causa de improcedencia en análisis, bajo el argumento de la autoridad responsable de que la quejosa no justificó la existencia de un acto de aplicación. Lo anterior es así, porque de las mismas pruebas que aportó la parte quejosa obran la propuesta de declaración de valor catastral y pago de impuesto predial que obtuvo en relación con el inmueble con cuenta predial *****.

De esta forma, en oposición a lo expresado por la autoridad responsable, en autos existen elementos objetivos que permiten deducir que la quejosa sí fue objeto de la aplicación del impuesto predial, que aun cuando se trata de una obligación auto determinable y auto liquidable, constituye *per se* el elemento requerido para considerar tales actividades como el primer acto de aplicación de la norma controvertida.

En consecuencia, al estar demostrado que la parte quejosa es contribuyente del impuesto predial respecto del inmueble a que se ha hecho referencia, así como del pago realizado de dicho impuesto para el ejercicio fiscal **dos mil veinticuatro**, con ello, está legitimada para controvertir la regularidad constitucional de la norma que se reclama, además de que con el recibo de pago ofrecido acredita el acto de aplicación; por lo tanto, no se tiene por comprobada la causa de improcedencia en estudio.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2002151, publicada en la página 1305, Libro XIV, Noviembre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación:

“IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS

Por otra parte, refiere la autoridad responsable que la quejosa no acredita su interés jurídico al omitir demostrar el rango bajo el cual se ubica el inmueble con cuenta predial *****; siendo que controvierte todas las tablas previstas en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal para la Ciudad de México.

Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 135/2001, con número de registro digital 187973, publicada en la página 5, del Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto que se transcriben a continuación:

Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse”.

c) Que la solicitante del amparo omitió formular conceptos de violación en relación con el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México.

12

Efigenia Minerua Coyotl Coyotl
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6f.3c
07/09/24 21:50:27



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 694/2024.

La parte quejosa aduce que el artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, transgreden en su perjuicio los artículos 1, 14, párrafos uno y dos, 16, párrafo primero, así como el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Afirma que “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, específicamente por lo que hace a la reforma del artículo 130, fracción I, al ser este una novación legislativa, la parte quejosa considera que el incremento y/o actualización de los valores que conforman el “Límite Inferior de Valor Catastral de un inmueble”, “Límite Superior de un Valor Catastral de un Inmueble” y “cuota fija”, constituye violaciones al principio de equidad tributaria, pues dicho aumento se ha incrementado de manera desproporcional e inequitativa para todos los contribuyentes.

Antes de analizar sus argumentos, cabe precisar que parte quejosa exhibió estas pruebas, ya señaladas en párrafos precedentes:

1. La propuesta de declaración de valor catastral y pago del Impuesto Predial respecto del inmueble ubicado en *****
***** * ***** * ***** * *****
***** ** ***** *****
***** ** ***** *****
***** ***** *****
***** ***** * *****
***** en la Ciudad de México, que tributa bajo la
cuenta predial ***** :

***** (como causahabiente de *****

***** , antes *****

***** ,
***** , por instrucciones de
los “***** EN PRIMER LUGAR” y del Comité Técnico de
Fideicomiso, TRANSMITE la plena propiedad y dominio del INMUEBLE a favor
de ***** , quien adquiere para sí el *****

***** y sus anexos consistentes en *****
cajones de estacionamiento y una bodega marcados con el mismo número del
departamento, y que forman una unidad, del conjunto condominal, ubicado en la
***** actualmente marcada con el número *****

México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Con tales pruebas, ya valoradas en párrafos precedentes, se evidencia
que la parte quejosa es sujeto del impuesto predial.

Por ello, se estima que es **fundado** el concepto de violación que
expresa.

En principio, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ha indicado que el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Federal prevé las garantías de justicia tributaria, entre las que se
encuentran los principios de **proporcionalidad y equidad**.

De acuerdo con el **principio de proporcionalidad**, los gravámenes
deben fijarse atendiendo a la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de
manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma
cualitativamente superior a los de medianos recursos.

Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre
aquel y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la
potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto
pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que
todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la
forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias
tributarias son medidas en función de esa riqueza.

De esa manera, en virtud de ese principio, se obliga al legislador a
graduar el impuesto de forma tal que la participación de los ciudadanos en el



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 694/2024.

sostenimiento del gasto público, se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada al realizar el hecho imponible.

Esa precisión hecha, se sustentó en el contenido de la jurisprudencia **P.J. 10/2003** del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 184291 y con este rubro: ***“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.”***

Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el **principio de equidad tributaria** consiste en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, es decir, dicha garantía exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentra en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula.

Ello implica, a su vez, que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia **P./J. 41/97**, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 198403 y con este rubro: “**EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS**”⁶

En el caso, el tema en estudio consiste en verificar si el contenido del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, respeta el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Para esclarecer ese punto, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión **721/2008** sostuvo que, para analizar la proporcionalidad y equidad del sistema de tributación del impuesto predial del entonces Distrito Federal para el **ejercicio fiscal dos mil ocho**, consideró la fuente de riqueza que se gravaba y el mecanismo establecido para cuantificar la base gravable del tributo.

De las consideraciones ahí expuestas, se destacan las siguientes:

6 **“EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.** El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.”

• La tarifa del impuesto predial se estructura conforme a un sistema de rangos o parámetros determinados entre un mínimo y un máximo según el valor catastral del inmueble, base gravable del tributo, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior.

• El criterio del Pleno del alto tribunal es en el sentido de que tratándose de impuestos que recaen sobre la propiedad raíz, la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, a fin de que en cada caso el impacto sea distinto.

• Tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra.

- La progresividad de la tarifa como criterio constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria, se consigue mediante la estructura de distintos rangos o parámetros de la base gravable definidos entre un límite mínimo y uno máximo, con la cuota fija y la tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior, dado que ello permite cuantificar el gravamen en atención a la verdadera capacidad contributiva del causante, ya que la tasa no se aplica sobre el total de la base, sino únicamente a la porción que excede de cada rango y al resultado se le suma la cuota fija, cuya cuantía debe corresponder a la del impuesto a pagar en el límite superior del rango inmediato anterior, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro.

- *La progresividad de la tarifa del impuesto predial se asegura mediante la aplicación de los elementos integrantes de la tabla que la contiene y, por ende, su estructura no se puede analizar aisladamente, tomando en cuenta, por un lado, los distintos rangos de la base gravable y, por otro, las cuotas y las tasas o porcentajes aplicables para el cálculo del tributo.*

- Para analizar la progresividad de la tarifa del impuesto predial, es necesario atender al propio mecanismo que la contiene, pero no solo en relación con la tasa y cuota fija que se aplica sobre el excedente del límite inferior, sino además valorando que el aumento de la alícuota entre un rango y otro sea proporcional al incremento de la base gravable que conduce al cambio de renglón, para lo cual, la medición debe efectuarse con el comparativo del renglón superior, pues será el parámetro que determinará el ascenso que va ocurriendo en el impacto tributario.

- El aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que la carga tributaria sea mayor en proporción al aumento del valor catastral del inmueble de que se trate, sin que tal incremento en el impuesto a pagar resulte en una medida mayor a la que tiene lugar en el renglón anterior por un aumento de la misma cuantía de la base gravable.

(...)"

18



valores de la tarifa, determinó que las tablas progresivas para el cálculo de dicho impuesto establecidas **para el ejercicio fiscal dos mil ocho** respetaban los principios constitucionales de progresividad y equidad.

Para arribar a esa conclusión, la Segunda Sala, en el amparo en revisión **721/2008**, realizó el cálculo previsto en el precepto ahí analizado para la obtención del impuesto predial.

Tal cálculo, en parte, se evidencia a continuación:

Rango	Base gravable	(-) Límite inferior	(x) Porcentaje / excedente	(+) Cuota fija	(=) Impuesto a pagar
A	153196.67	0.11	0.01273	120.00	139.50
B	153197.68	153196.68	0.02426	139.50	139.50
B	306392.88	153196.68	0.02426	139.50	176.66
C	306393.89	306392.89	0.07582	176.67	176.67
C	612786.93	306392.89	0.07582	176.67	408.97
D	612787.94	612686.94	0.09304	408.98	409.07
D	919179.80	612786.94	0.09304	408.98	694.05
E	919180.81	919179.81	0.09542	694.06	694.06
E	1225573.85	919179.81	0.09542	694.05	986.42
F	1225574.86	1225573.86	0.11091	986.42	986.53
F	1531966.73	1225573.86	0.11091	986.42	1326.24
G	1531967.74	1531966.74	0.11461	1326.24	1326.35

Sobre ese punto, como lo consideró la Segunda Sala al resolver el amparo en revisión **721/2008**, la progresividad de la tarifa como criterio constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria se consigue mediante la estructura de distintos rangos o parámetros de la base gravable definidos entre un límite mínimo y uno máximo, con la cuota fija y la tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior, dado que ello permite cuantificar el gravamen en atención a la verdadera capacidad contributiva del causante.

Luego, para analizar la progresividad de la tarifa del impuesto predial, **ese órgano colegiado consideró que es necesario atender al propio mecanismo que la contiene**, pero no solo en relación con la tasa y cuota fija que se aplica sobre el excedente del límite inferior, sino además valorando que el aumento de la alícuota entre un rango y otro sea proporcional al incremento de la base gravable que conduce al cambio de renglón, para lo cual, la medición debe efectuarse con el comparativo del renglón superior, pues será el parámetro que determinará el ascenso que va ocurriendo en el impacto tributario.

...lo que, en cam
...a, aporta un
...uesto, el i
...ente indicad

de tributación
de México
si el artículo
para 2024

ismo sigue

ente del límite
ente al propio r

valores prop

0.02041

0.03891

0.03891

0.12159

	0.12159
	0.14919



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

rango D					
---------	--	--	--	--	--

Mayor valor rango D	\$1,357,491.87	\$904,995.17	0.14919	\$803.67	\$1,478.74
Menor valor rango E	\$1,357,491.88	\$1,357,491.87	0.15302	\$1,363.88	\$1,363.88

Mayor valor rango E	\$1,809,990.33	\$1,357,491.88	0.15302	\$1,363.88	\$2,056.29
Menor valor rango F	\$1,809,990.34	\$1,809,990.33	0.17785	\$1,938.40	\$1,938.40

Mayor valor rango F	\$2,262,487.03	\$1,809,990.34	0.17785	\$1,938.40	\$2,743.16
Menor valor rango G	\$2,262,487.04	\$2,262,487.03	0.18379	\$2,606.16	\$2,606.16

Mayor valor rango G	\$2,714,983.74	\$2,262,487.04	0.18379	\$2,606.16	\$3,437.80
Menor valor rango H	\$2,714,983.75	\$2,714,983.74	0.20082	\$3,296.26	\$3,296.26

Mayor valor rango H	\$3,167,482.21	\$2,714,983.75	0.20082	\$3,296.26	\$4,204.96
Menor valor rango I	\$3,167,482.22	\$3,167,482.21	0.21002	\$4,050.25	\$4,050.25

Mayor valor rango I	\$3,619,978.91	\$3,167,482.22	0.21002	\$4,050.25	\$5,000.58
Menor valor rango J	\$3,619,978.92	\$3,619,978.91	0.21614	\$4,838.83	\$4,838.83

Mayor valor rango J	\$4,072,477.38	\$3,619,978.92	0.21614	\$4,838.83	\$5,816.86
Menor valor rango K	\$4,072,477.39	\$4,072,477.38	0.22278	\$5,650.34	\$5,650.34

Mayor valor	\$4,524,974.07	\$4,072,477.39	0.22278	\$5,650.34	\$6,658.41
--------------------	----------------	----------------	---------	------------	-------------------



Esa falta de progresividad se mantiene y se advierte **así sucesivamente**
rango por rango.

Debe puntualizarse que las operaciones aritméticas referidas no pueden ser desconocidas por la autoridad responsable, esto es, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dado que se refiere al propio mecanismo que establece la norma reclamada.

Por consiguiente, del ejercicio que se realizó se observa que no existe progresividad en las tarifas del impuesto predial que prevé el precepto legal impugnado.

El aumento en una unidad del parámetro de medición (un centavo) de la base gravable que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que la carga tributaria sea menor en proporción al aumento del valor catastral del inmueble de que se trate, resultando en una medida menor a la que tiene lugar en el renglón anterior.

Aunque el mecanismo implementado en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México pretende el incremento progresivo y proporcional del impuesto en relación con el valor catastral, lo cierto es que, matemáticamente, los valores empleados no permiten que se incremente gradualmente el monto de la contribución, pues del contenido del ejercicio realizado se evidencia que no hay una efectiva relación de equivalencia entre los valores de un renglón y otro, esto es **no son progresivas** y esto provoca que la diferencia de un centavo entre un rango y otro no se encuentre compensado con la cuota fija y porcentaje sobre el excedente establecidos para su aplicación.

En mérito de esas consideraciones, es dable concluir que la tarifa que contiene el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para este año, viola el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal.

Lo anterior, ya que el incremento porcentual de las tasas y cuotas previstas en la tabla que la contiene y su reducción de rangos, afecta su **progresividad**; máxime que al sumarse la cuota fija al resultado de aplicar la

trato desigual
es se ubican
los expueste
valor catastr
ncipios analiz
to de violació
Código Fiscal
nalidad y eq
cional.
al exhibida –
bica en el ra
superior de e
o sobre la pr
udad de Méx
un parámetr
establecer c
un inmueble
el estudio c
ntegridad y r
oyente.

to de violaci

Código Fiscal

nalidad y eq
cional.

0

exhibida -y
bica en el ra

superior de e

o sobre la pr

en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si a los contribuyentes que se encuentran alojados en el mismo rango se les aplica la reducción del 0%. Este análisis de equidad lineal en donde a los sujetos ubicados en un mismo renglón se les otorga igual tratamiento, con lo que se tenía por cumplido ese principio, ha sido superado por criterios recientes de la actual integración de la Suprema Corte, en los cuales, tratándose de tablas y tarifas fiscales, la perspectiva vertical es la idónea para examinar si aquellas cumplen o no con el principio de equidad tributaria, tomando en cuenta todos los renglones y no internamente sólo uno de ellos, dado que requieren ser progresivas.”

Sin que en el caso, resulte aplicable el análisis hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 7/2017, en el que determinó que el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, analizado en dicho asunto en particular, no vulneraba el principio de proporcionalidad tributaria; sin embargo, ello se debió a que del análisis de todo el sistema tributario, las tarifas ahí prevista si eran progresivas.

Véase:

Rango	Valor Catastral (VC)	Límite Inferior de Valor Catastral de un Inmueble	Excedente sobre Límite Inferior VC-Límite Inferior=Excedente	Porcentaje Para Aplicarse Sobre el Excedente del Límite Inferior (PSELI)	Resultado Excedente * PSELI	Cuota Fija (CF)	Impuesto a Pagar Resultado + CF
A	162,740	0.11	162,739.8900	0.01693	\$ 27.5519	169.62	\$ 197.1719
B	162,741	162,740.83	0.1700	0.03228	\$ 0.000055	197.18	\$ 197.1801
B	325,481	162,740.83	162,740.1700	0.03228	\$ 52.5325	197.18	\$ 249.7125
C	325,482	325,481.17	0.830000000016296	0.10089	\$ 0.0008	249.72	\$ 249.7208
C	650,963	325,481.17	325,481.8300	0.10089	\$ 328.38	249.72	\$ 578.0986
D	650,964	650,963.57	0.4300000000051	0.12380	\$ 0.0005	578.10	\$ 578.1005
D	976,444	650,963.57	325,480.4300	0.12380	\$ 402.9448	578.10	\$ 981.0448
E	976,445	976,444.71	0.2900000000037253	0.12697	\$ 0.0004	981.07	\$ 981.0704
E	1,301,927	976,444.71	325,482.2900	0.12697	\$ 413.26	981.07	\$ 1,394.3349
F	1,301,928	1,301,927.11	0.8899999999897554	0.14757	\$ 0.0013	1,394.34	\$ 1,394.3413
F	1,627,408	1,301,927.11	325,480.8900	0.14757	\$ 480.3121	1,394.34	\$ 1,874.6521
G	1,627,409	1,627,408.27	0.729999999981373	0.15251	\$ 0.0011	1,874.68	\$ 1,874.6811
G	1,952,889	1,627,408.27	325,480.7300	0.15251	\$ 496.3907	1,874.68	\$ 2,371.0707
H	1,952,890	1,952,889.40	0.6000000000093132	0.16663	\$ 0.0010	2,371.07	\$ 2,371.0710
H	2,278,371	1,952,889.40	325,481.6000	0.16663	\$ 542.3500	2,371.07	\$ 2,913.4200
I	2,278,372	2,278,371.82	0.1800000000167638	0.17427	\$ 0.0003	2,913.42	\$ 2,913.4203
I	2,603,852	2,278,371.82	325,480.1800	0.17427	\$ 567.2143	2,913.42	\$ 3,480.6343
J	2,603,853	2,603,852.97	0.0299999999795109	0.17934	\$ 0.0001	3,480.65	\$ 3,480.6501
J	2,929,335	2,603,852.97	325,482.0300	0.17934	\$ 583.7195	3,480.65	\$ 4,064.3695

33 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CXXXVI/2007, Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, julio de 2007. Página: 27 de rubro siguiente:

Sin embargo, al aplicar en este asunto un ejercicio similar se evidenció que, para el ejercicio fiscal del dos mil veinticuatro, las tarifas para cada rango no guardan proporción con el aumento a la base gravable y, por ende, no respetan el principio de progresividad.

En este punto surge esta interrogante ¿el vicio de inconstitucionalidad detectado en la norma tributaria en estudio **recae** en un elemento esencial del sistema de tributación o en un elemento variable?

Se explica.

Pero, en ese mismo criterio se precisó que cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.

7 Texto: Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.



surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas.

Los elementos del impuesto predial previsto en el artículo reclamado, son los siguientes:

a. Sujeto: Las personas físicas y las morales propietarias o poseedoras de inmuebles en la Ciudad de México. (Artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México)

b. Objeto: Los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, ya sea suelo y/o las construcciones adheridas a él. (Artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México)

c. Base: El valor catastral del inmueble. (Artículo 127 del Código Fiscal de la Ciudad de México)

d. Época de pago: Bimestral. (Artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México); y

e. Tasa: La determinada al ubicar el inmueble en alguno de los rangos A al P, la **cuota fija** y **el factor de aplicación** sobre el excedente del límite inferior, es decir, determinar la obligación tributaria, implica realizar la operación siguiente (Artículo 130, fracción I del citado Código).

En ese sentido, el mecanismo de tributación del impuesto predial de que se trata, es complejo, en atención a que surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas.

Luego, como se demostró con el ejercicio de cálculo del impuesto predial, de acuerdo con la mecánica prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en dos mil veinticuatro, al sumarse la cuota fija al resultado de aplicar la tasa sobre el excedente del límite inferior, no se logra que la alícuota a pagar se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable, provocando con ello que los contribuyentes con una menor capacidad contributiva paguen una mayor contribución.

En el caso, esas variables lo son la **cuota fija y el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior.**

Atendiendo a la tabla de valores prevista en el artículo 130, fracción I, del citado ordenamiento, se advierte que la cuota fija sí es proporcional y

Entonces, el elemento variable que provoca la distorsión advertida en el ejercicio antes realizado, es el relativo a los **diversos factores de aplicación al excedente del límite inferior**.

Ello se produce dado que al realizar la mecánica prevista en el citado artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, y aplicar los diversos porcentajes sobre el excedente del límite inferior, esa distorsión se vuelve patente al sumar la cuota fija de cada rango.

Así, si de la mecánica establecida en el citado artículo se elimina el porcentaje de aplicación al excedente del límite inferior, únicamente como elemento variable para el cálculo del impuesto predial quedaría la cuota fija, la cual, como se dijo, es proporcional y progresiva.

Lo anterior, ya que inmuebles que se ubicaran dentro de un mismo rango, pero con bases gravables diversas, la aplicación de ese porcentaje mantendría la proporcionalidad del tributo.

28

Para demostrar lo anterior, se realizará el mismo ejercicio hecho con antelación, con las mismas bases gravables y cuotas fijas de cada rango, pero empleando el porcentaje de aplicación del rango A.

Ello se hace atendiendo al mecanismo siguiente:

Fórmula para el cálculo impuesto predial.
Valor catastral del inmueble Menos (-) Límite inferior del valor catastral del inmueble que corresponda, según el rango en el que se ubique Por (x) Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior del rango A Más (+) Cuota fija correspondiente al propio rango

Se ejemplifica:

Base gravable (valores máximos y mínimos de cada rango)		Valores propios del rango			
		(-) Límite inferior	(x) % exc.	(+) Cuota fija	(=) Impuesto a pagar
Mayor valor rango B	\$452,496.74	\$226,248.71	0.02041	\$274.12	\$320.30
Menor valor rango C	\$452,496.75	\$452,496.74	0.02041	\$347.15	\$347.15
Mayor valor rango C	\$904,995.16	\$452,496.75	0.02041	\$347.15	\$439.50
Menor valor rango D	\$904,995.17	\$904,995.16	0.02041	\$803.67	\$803.67
Mayor valor rango D	\$1,357,491.87	\$904,995.17	0.02041	\$803.67	\$896.02
Menor valor rango E	\$1,357,491.88	\$1,357,491.87	0.02041	\$1,363.88	\$1,363.88
Mayor valor rango E	\$1,809,990.33	\$1,357,491.88	0.02041	\$1,363.88	\$1,456.23
Menor valor rango F	\$1,809,990.34	\$1,809,990.33	0.02041	\$1,938.40	\$1,938.40
Mayor valor	\$2,262,487.03	\$1,809,990.34		\$1,938.40	\$2,030.75

o del impues
uicio de la p
n IV, Constitu

por el artículo
liano costo;
es, la aminor
s consignad

a de los arg
ar en cuenta
ados Unidos
al gasto públ

tema Corte d
outaria radica
ibuto, los cu
nera igual a

bio, el legisla
ear categor

Pleno de la
2290 y 1984

Pleno de la
2290 y 1984



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 694/2024.

CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que puedan responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales”.

“EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica”.

Para delimitar el alcance del principio de equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ciertos elementos:

1) No toda desigualdad de trato por ley supone una violación a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino que dicha violación se configura solamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.

ción que esa c
ncipios de ju
ción más am
ómica del sup
dio a la luz c
ede vincular
a, o si a otro

estaba inmerso en los documentos, resultaba porque no había beneficios fiscales por la contribución.

gen a la jurisdicción de la Corte de lo Contencioso es el siguiente:

DO DE NUE
GLAS DE
MATERIA
MISMA EN
LOS PRINCI

negra su me-
gamiento es
dinero de un
rargar los co-
capacidad c
mpedir que s
uede analiz
revistos en e
los Estados
gularidad c
o. de la Con.

que la porción
consistente en
quello's cont
de la letra "A"



prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, por lo que excluye a quienes, como en el caso de la quejosa, se ubiquen en rangos superiores; ello, como se demuestra con la transcripción siguiente:

“ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO de este Acuerdo, los contribuyentes deberán determinar el Impuesto a pagar en los términos establecidos en el Código, para así encontrar el rango que les corresponde, y poder aplicar los subsidios fiscales que a continuación se indican:

a) Para el pago del Impuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código, el subsidio otorgado corresponderá a la diferencia entre el Impuesto determinado y las cuotas que a continuación se mencionan:

RANGO	CUOTA DE SUBSIDIO
<i>A</i>	\$ 62.00
<i>B</i>	\$ 71.00
<i>C</i>	\$ 86.00
<i>D</i>	\$ 102.00

b) Para el pago del Impuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código, se otorga un subsidio correspondiente a la diferencia que se obtenga del Impuesto que los contribuyentes deben enterar de conformidad con las disposiciones aplicables del Código, menos el porcentaje que a continuación se menciona:

<i>RANGO</i>	<i>PORCENTAJE DE SUBSIDIO</i>
<i>E</i>	50 %
<i>F</i>	35 %
<i>G</i>	25 %

$$(\dots)''$$

Por su parte, el artículo 130 fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para este ejercicio fiscal establece lo siguiente:

“ARTICULO 130.- El Impuesto Predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo:

I. TARIFA.

	LÍMITE INFERIOR DE VALOR CATASTRAL DE UN INMUEBLE	LÍMITE SUPERIOR DE VALOR CATASTRAL DE UN INMUEBLE	CUOTA FIJA	PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR
A	\$0.12	\$226,248.70	\$235.83	0.02041
B	\$226,248.71	\$452,496.74	\$274.12	0.03891
C	\$452,496.75	\$904,995.16	\$347.15	0.12159
D	\$904,995.17	\$1,357,491.87	\$803.67	0.14919
E	\$1,357,491.88	\$1,809,990.33	\$1,363.88	0.15302
F	\$1,809,990.34	\$2,262,487.03	\$1,938.40	0.17785
G	\$2,262,487.04	\$2,714,983.74	\$2,606.16	0.18379
H	\$2,714,983.75	\$3,167,482.21	\$3,296.26	0.20082
I	\$3,167,482.22	\$3,619,978.91	\$4,050.25	0.21002
J	\$3,619,978.92	\$4,072,477.38	\$4,838.83	0.21614
K	\$4,072,477.39	\$4,524,974.07	\$5,650.34	0.22278
L	\$4,524,974.08	\$4,977,470.79	\$6,486.81	0.22883
M	\$4,977,470.80	\$5,430,400.18	\$7,346.02	0.24174
N	\$5,430,400.19	\$16,291,198.74	\$8,254.55	0.26103
O	\$16,291,198.75	\$34,288,646.05	\$31,779.04	0.26117
P	\$34,288,646.06	En adelante	\$70,781.31	0.27150

(...)"



De lo anterior, se advierte que los contribuyentes determinarán el impuesto predial bimestralmente aplicando al valor catastral de los inmuebles la tarifa respectiva, que se conforma de dieciséis rangos que van de la letra “A” a la letra “P”, determinados entre un mínimo y un máximo según el propio valor, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior; y, en el caso de inmuebles de uso habitacional los contribuyentes que se establecen en el acuerdo reclamado tendrán derecho a una reducción del impuesto predial a su cargo.

Así, los sujetos pasivos que se ubiquen en los rangos de la letra “A” a la letra “D” de la tarifa respectiva, pagarán la cuota con subsidio, y los ubicados en los rangos correspondientes de la letra “E” a la letra “G” se les aplicará el porcentaje del subsidio que ahí se indica; en tanto que los que estén en los rangos “H” al “P”, no están contemplados para que disminuyan el impuesto predial a su cargo.

Es menester tener en cuenta que el impuesto predial es un gravamen directo cuyas consecuencias inciden sobre derechos reales al gravar valores económicos vinculados con un bien raíz, por lo que en la especie, para acreditar que la quejosa cuenta con un derecho que pudiera ser trastocado con motivo de los actos que en esta vía se reclaman debió exhibir constancias idóneas que demostraran que es titular de derechos subjetivos sobre un bien objeto del tributo; lo anterior, encuentra justificación en el contenido del artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México que establece como sujetos del impuesto predial a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, esto último acreditable en principio con la escritura correspondiente o en su caso con el documento que acredite posesión del inmueble.

Ahora, para acreditar que es sujeta del tributo en mención y la afectación en sus derechos con motivo de su exclusión de los beneficios previstos en el Acuerdo impugnado, la parte quejosa exhibió las documentales siguientes:

1. La propuesta de declaración de valor catastral y pago del Impuesto Predial respecto del inmueble ubicado en ***** ***** ***** *****

***** ** ***** ***** * ***** ***** ***** **

***** en la Ciudad de México, que tributa bajo la
cuenta predial *****.

(***** * **** * ***** ***** * **** ***** ***** *****
*****), en relación con la cuenta *****.

3. Recibo de pago a la Tesorería, de veintiséis de enero de dos mil
veinticuatro, por la suma de \$***** (***** * **** * ** *****
***** * **** * ** ***** ***** ***** *****),.

4. Asimismo, la escritura pública ***** , de veinticinco de junio de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Número ** de la Ciudad de México, ***** ***** ***** ***** ***** , relativa a:

A. Transmisión de Propiedad en Ejecución de Fideicomiso y Ejecución del mismo. El Fiduciario **** *

***** (como causahabiente de *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** , antes *****

***** ***** *****

***** , por instrucciones de

los ***** EN PRIMER LUGAR” y del Comité Técnico de Fideicomiso, TRANSMITE la plena propiedad y dominio del INMUEBLE a favor de ** ***** , quien adquiere para sí el *****

***** Life Cycle *****

***** y sus anexos consistentes en *****

cajones de estacionamiento y una bodega marcados con el mismo número del departamento, y que forman una unidad, del conjunto condominal, ubicado en la ***** ** actualmente marcada con el número ***** ** ***** ***** *

***** ** ** ***** ***** ***** ***** ** ***** ***** ***** *****

México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

proprietaria

del inmueble a que se han hecho referencia, que su uso es de casa habitación **
 **, y que respecto de éste se efectuó el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal para dos mil veinticuatro; además de que no



Es así pues, al no establecer un descuento para el pago del impuesto predial respecto de los rangos entre los que se ubica el inmueble de la parte solicitante del amparo, se desconoce que el régimen especial de tributación para

Efigenia Minerua Coyotl Coyotl
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6f.3c
07/09/24 21:50:27

Acuerdo en
, transgrede
blece guarda
e y tarifa; a
modifican la
de la Ciudad
nivel de los
gradúan la
disposiciones
la equidad.

ón establecido
por el que se
a el ejercici
de equidad

...ción vigente e
...existía un sis
...o 130, fracc
.../53 A (10a.)
...úmero de re

FRACCIÓN
O FEDERAL
CÁLCULO
IO DE EQU
reducción, c
al del inmue
respecto, el l
cio, la vulner
eterminadas
ribuyentes. A
e su única fun
completa y
aunque sea
cional de s
o aludido, por
bles en rela
que en los ra
e está frente
as zonas de

El precepto indicado prevé una reducción, como beneficio fiscal, relacionada con el valor catastral del inmueble, para efecto del cálculo del impuesto predial. Al respecto, el legislador tomó como parámetros para incluir el beneficio, la vulnerabilidad en el Distrito Federal, el mayor rezago en determinadas zonas, así como los ingresos per cápita de los contribuyentes. Ahora bien, desde el momento en que el tributo pierde su única función original, que es la recaudadora, la cual debe ser completa y no parcial (en inicio), al sacrificarse esa recaudación, aunque sea en parte, se exige al legislador la validación constitucional de su actuar, lo cual no acontece en el caso del beneficio aludido, porque el hecho de que el valor catastral de los inmuebles en relación con los cuales puede operar la reducción se ubique en los rangos respectivos, no necesariamente significa que se está frente a los grupos más vulnerables de la ciudad, a las zonas de mayor rezago en servicios y a los contribuyentes de menores ingresos per cápita, en virtud de que pueden darse distintas condiciones y circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, resida en esas zonas. De ahí que, si bien es poco probable que determinado inmueble cuente con un valor catastral menor al que



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 694/2024.

tengan otros de características análogas, aunque esté ubicado en una zona que no sea considerada vulnerable o rezagada, por lo que sería objetiva y razonable la justificación del legislador en ese sentido, no se trata del único motivo, por lo que la reducción no encuentra pleno asidero constitucional, al generar un trato diferenciado; de ahí que el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal que prevé una reducción en el cálculo del impuesto predial en favor de quienes se ubiquen en los rangos ahí determinados, viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Criterio en el que el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que la reducción que preveía el mencionado precepto legal, no encontraba sustento constitucional, porque se creó a partir de razones que solamente eran válidas parcialmente, y si se tiene en cuenta que el beneficio debe estar justificado de manera objetiva y razonable, sin que haya lugar a arbitrariedades, el trato diferenciado que generaba la reducción, al permitir acceder a aquél sólo a quienes contaban con inmuebles con valores catastrales que se situaban en los rangos ahí especificados, generaba un trato diferenciado que violaba el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en lo que se refiere al principio de equidad tributaria.

En ese tenor, resulta **fundado** el concepto de violación que sobre el particular se propone; y lo **procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal** solicitado por la parte quejosa.

OCTAVO. Efectos de la tutela constitucional. Con el fin de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales a la parte quejosa *****
 ***** , una vez que la sentencia quede firme el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México deberá ordenar a la Tesorería de la Ciudad de México:

UNO:

RELATIVO A LA CONCESIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 130,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL
VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

Deberá determinar el impuesto predial que resulte de aplicar la fórmula prevista en esa norma tributaria, partiendo de ubicar, en el rango correspondiente, la base gravable del inmueble sujeto al tributo, es decir, el ubicado en ***** ***** ***** ***** ***** **** ***** ***** *

en la Ciudad de México, vinculado a la cuenta predial ***** y sustituir



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 694/2024.

cuota fija reducida prevista en el rango D, del inciso a), del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, vigente para esta anualidad.

Debe tomarse en cuenta que lo que se declaró inconstitucional fue la normativa que regula el beneficio fiscal en favor de los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional a bajo costo, ello implica que la mecánica del tributo regulada en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México y que está diseñada sobre valores progresivos, continúa rigiendo en el cálculo del impuesto predial, con los parámetros del punto uno.

Además, véase la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), con número de registro 2019364, cuyo rubro y texto señalan: **“IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”**⁹

El cumplimiento de ambos efectos deberá realizarse en lo futuro hasta en tanto no sea reformado el artículo reclamado del Código Fiscal de la Ciudad de México y Acuerdo General referidos.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 112/99, de rubro:

“AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.”⁸

Esa concesión respecto de la cuota fija prevista en el rango D, atiende también a los razonamientos vertidos en la jurisprudencia PR.A.CN.J/30A (11a.) del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2027640, de rubro: **“IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER**

POR (X)
6 (SEIS)
IGUAL (=)

TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR AÑO.

⁹ **TEXTO:** “En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se sustituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo.”

GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DE ESE TRIBUTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2022”¹⁰.

TRES:

Considerando que **se acreditó el pago del impuesto predial** relativo a los **seis bimestres de este ejercicio fiscal** y atendiendo a los efectos del amparo –antes precisados-, una vez que se le determine el nuevo monto del impuesto referido, en caso de que existan diferencias, **deberá devolverse la cantidad resultante con su correspondiente actualización.**

NOVENO. Publicación de la sentencia. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.

¹⁰ Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al analizar los efectos de la protección constitucional contra el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial de la Ciudad de México, pues mientras uno consideró que debe substituirse la cuota fija correspondiente al rango de la tarifa del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México en el que se ubique la persona quejosa, por la cuota reducida establecida para el rango D en la disposición administrativa reclamada; el otro sostuvo que el tributo debe calcularse conforme a la tarifa de ley y, posteriormente, aplicarse el descuento porcentual previsto en el acuerdo reclamado para el rango G.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se concede el amparo sólo contra el inciso a) del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial de la Ciudad de México correspondiente a los años 2020 y 2022, sus efectos consisten en sustituir la cuota fija originalmente prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la entidad federativa citada para el rango al cual corresponde el valor del inmueble de la persona quejosa, por la cuota reducida establecida en dicho inciso para el rango D; cuando se otorga la protección constitucional únicamente contra el inciso b) del propio precepto, se aplicará el descuento porcentual señalado en tal inciso para el rango G; y si se concede el amparo respecto de ambos incisos, los efectos consistirán en que se aplique la cuota reducida indicada para el rango D del inciso a) o el descuento porcentual previsto para el rango G del inciso b), según sea lo que más beneficie a la persona contribuyente de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular.

Justificación: De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal, cuando se concede el amparo por violación al principio de equidad tributaria, el efecto de la sentencia se traduce en que se incluya a la parte quejosa en el beneficio que prevea la norma reclamada. En este sentido, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 226/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se otorgue la protección constitucional contra los subsidios para el pago del impuesto predial por violación al referido principio, el efecto de ese amparo es conceder a la persona quejosa el beneficio correspondiente a los sujetos más próximos a su situación; esta solución, que compartió el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), conduce a estimar que si se declara la inconstitucionalidad del inciso a) del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en la Ciudad de México correspondiente a los años 2020 y 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el 31 de diciembre de 2019 y el 18 de enero de 2022, respectivamente, que prevé cuotas minoradas decrecientes, la persona contribuyente debe gozar del beneficio establecido en el rango D por ser el más próximo a aquel en el que se encuentra; en la misma lógica, en caso de que se otorgue la protección constitucional contra el inciso b), se aplicará el descuento porcentual previsto en el rango G, porque éste es el más cercano a la situación de la persona quejosa; y cuando se conceda el amparo contra ambos incisos, para restituir cabalmente a las personas contribuyentes excluidas en el goce de los derechos violados, según exigen los principios de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, así como los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, será menester aplicarles el más benéfico de los apoyos, es decir, el que corresponda al rango D o al rango G, lo que dependerá de cada asunto en particular, en virtud de que se trata de dos subsidios distintos que se calculan con base en procedimientos diferentes, por lo que las ventajas que arrojan también son disímiles dependiendo del valor del inmueble.



DÉCIMO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se:

RESUELVE:

PRIMERO. La justicia de la Unión **ampara y protege a** *****
***** *****, por los actos y autoridad responsable señalados en el
considerando **TERCERO** de esta sentencia, en atención a las razones
expresadas en los considerandos **SEXTO** y **SÉPTIMO** y para los efectos
precisados en el **OCTAVO** considerando de este fallo.

SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos
NOVENO y DÉCIMO.

Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

Así lo resolvió y firma **Blanca Alicia Ochoa Hernández** Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Efigenia Minerva Cóyotl Cóyotl, quien autoriza, y certifica que ésta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico hasta hoy once de julio de dos mil veinticuatro, en que lo permitieron las labores del juzgado. **Doy fe.**

Jueza

Secretaria

Blanca Alicia Ochoa Hernández Efigenia Minerva Cóyotl Cóyotl

En esta fecha, se giraron los oficios 80467, 80468 y 80469, para notificar a las partes la sentencia que antecede. **Conste.**

La secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, certifica que la presente foja y las firmas que en ella se encuentran plasmadas, corresponden a la sentencia de esta fecha, dictada en el juicio de amparo 694/2024. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
88743530_0949000035311424003.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	Efigenia Minerva Coyotl Coyotl	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6f.3c	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/07/24 22:22:51 - 11/07/24 16:22:51	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	1f e9 4d f2 ee af 9e aa bc d1 38 62 88 d7 6a 7c 6e 46 22 8d d7 e5 16 b9 e0 d8 91 84 d1 db 87 c9 0b 22 a0 20 2a a7 26 33 6c 91 8f e4 e9 e6 b4 29 4d db f9 3a 57 54 a2 fe fd 25 66 9b eb 32 1d 75 9f 70 54 8e cb 1a cf 7b 07 16 c8 7d 38 3e d7 e7 6c d7 df 3a dc 60 1c 86 2c f3 8c 34 6f 45 4c 74 cb 1c 21 99 2f 7b 08 ff 47 1c af 75 1d 2d 56 d5 cf 76 d5 3b fd 1e 90 6b 7a a8 67 95 00 0f d5 e4 85 02 1c 43 20 b0 28 15 6d c4 5c f3 2f 25 2c 94 7d 6c 57 ad ad 46 7a d0 82 fd e1 0f f8 a7 9e 71 3d 46 b4 50 3f 5e 88 e5 36 0d 9f f9 c5 3c d9 3c d3 e5 d9 b9 e7 ee 24 18 00 31 50 73 c7 3b 16 97 2d 36 02 aa d6 d6 27 c6 df b0 a8 ba 10 c8 22 b9 82 71 80 af fc 13 df 80 43 bd 49 fe 28 e4 1b ea 0a dd 6c df 86 d8 97 4d 36 88 01 30 c9 98 a4 04 e3 34 2d 8c 4e ec c9 6d 39 64 b9 cd ef e2 f5 5a			
OCSF				
Fecha: (UTC / CDMX)	11/07/24 22:22:50 - 11/07/24 16:22:50			
Nombre del respondedor:	OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	11/07/24 22:22:51 - 11/07/24 16:22:51			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	162149138			
Datos estampillados:	OyAdBwQelfS9LY5jOFdIlyKKhsU=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	BLANCA ALICIA OCHOA HERNANDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.59.63	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/07/24 23:03:08 - 11/07/24 17:03:08	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	bc 65 7a eb 52 05 7e 32 c4 c8 d1 4f 4b 2e e7 0e 1c 55 0b e1 5c ce af 38 9e 82 83 c9 4c 8a 9d 9a 14 73 4f 54 37 bc 4e 50 22 87 65 a6 4e 6f cd bb b9 63 d9 3d 9f ba 70 e5 98 9f 0c 37 bb e3 14 5e f2 ef 36 02 9b a3 27 90 c3 89 93 c3 70 99 57 8e 97 9f bf 3d f9 83 24 5f 08 73 24 12 09 ef 12 41 94 3e 96 74 a2 90 25 98 81 0e ff 45 58 6c df 04 f5 66 2d c4 a1 29 b8 95 39 41 61 4b ba ca 15 f9 ed 1d e3 04 48 d5 98 81 00 c9 5c 63 96 25 27 ac 90 6b 00 83 51 d3 14 49 6c 20 88 f7 eb 5e 4d 99 2a 4e 6b 20 81 79 67 c4 49 91 7b 08 9c 72 2c ab b3 e6 b5 e7 60 b6 85 9e 63 36 7c da ec cc e2 6a c5 df c2 15 d8 c3 c5 b2 1b 98 fa fb 6b f7 3a b6 83 cd 5d 1a 92 bb ce 22 d9 db 60 d2 50 38 68 0e 8e ee 02 ec 77 cd 70 1d d0 f4 0e 50 e6 35 5f 97 19 bf 20 16 cf 59 e1 70 b6 ff aa e9 86 e4 26 8b			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	11/07/24 23:03:08 - 11/07/24 17:03:08			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	11/07/24 23:03:09 - 11/07/24 17:03:09			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	162177681			
Datos estampillados:	Da6EzdXx2ofGx+MjJaXRPjyl2x0=			

El once de julio de dos mil veinticuatro, la licenciada Efigenia Minerva Cóyotl Cóyotl, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.